

República de Colombia



Juzgado Cuarto Laboral del Circuito

Calle 15 N° 5-06 Edificio Antiguo Telecom, Piso Dos

Valledupar - Cesar

Correo electrónico: j04lcypar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Proceso: ORDINARIO.

Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Demandado: ANGEL ENRIQUE CARVAJAL DIAZ.

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00654-00.

Fecha: 28 de octubre de 2021-.

Atendiendo que, en el presente proceso, el Tribunal Administrativo del Cesar, en auto del 10 de junio de 2021, resolvió declarar la falta de competencia para conocer del mismo y ordeno su remisión a la Oficina Judicial, para que, sea repartido en los Jueces Laborales del Circuito Judicial de Valledupar, por considerar que, la demanda promovida por COLPENSIONES contra ANGEL ENRIQUE CARVAJAL DIAZ, debe ser conocida por la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en tanto que, el demandado ostenta la calidad de trabajador particular, pues sus cotizaciones las hizo en DRUMMOND LTDA., de conformidad, con la información contenida en la Resolución SUB 21643 del 25 de enero de 2018, en la que, se reconoció la pensión de invalidez del actor.

Pues bien, esta agencia de justicia, al realizar el estudio del proceso referido, no comparte lo planteado por el Tribunal Administrativo del Cesar, y, en consecuencia, propondrá el correspondiente conflicto de jurisdicciones, puesto que, según este análisis, el conocimiento del presente asunto, no corresponde o está asignado a los jueces del trabajo, sino, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Como quiera que, en este caso, la demanda presentada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, pretende **(1)** Que se declare la Nulidad de la Resolución SUB 21643 del 25 de enero de 2018, mediante la cual Colpensiones, reconoció una Pensión de Invalidez a favor del señor ANGEL ENRIQUE CARVAJAL DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.007.017, a partir de 17 de octubre de 2017, toda vez que, se demostró que, el porcentaje de PCL, fue adulterado y como consecuencia, no cumple con los requisitos de la Ley para ser beneficiario de la prestación; **(2)** A título de restablecimiento del derecho, se ORDENE al señor ANGEL ENRIQUE CARVAJAL DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.007.017, el REINTEGRO de lo pagado por concepto de mesadas, retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de la pensión de Invalidez, que actualmente se fija en la suma de \$66.175.061, conforme lo indica la resolución SUB 321497 del 25 de noviembre de 2019; **(3)** Se ordene la INDEXACION de las sumas reconocidas a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y al pago de intereses a los que hubiere lugar, por las mesadas recibidas por el demandado, con ocasión al reconocimiento prestacional.; **(4)** Se condene en costas a la parte demandada.

Respecto de ese puntual tema, es decir, sobre las nulidades de los Actos Administrativos proferidos por la parte demandante ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, precisar el despacho, lo establecido en la sentencia 01597 de 2017, del Consejo de Estado, donde se expresó:

*“...ARTÍCULO 83. Modificado por el art. 13, Decreto Nacional 2304 de 1989.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan...”*

Así mismo, la competencia de la jurisdicción en cuanto a la primera instancia de los Tribunales Administrativos, está circunscrita al artículo 132 del C.C.A., modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, cuyo numeral 2º instituye que:

“...Los Tribunales Administrativo conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo (...)”

Con fundamento en lo anterior, estas normas, indican que esta jurisdicción está instituida para el juzgamiento de los actos administrativos, y en dicho contexto, conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos de cualquier autoridad.

Ahora bien, en la citada jurisprudencia, el Consejo de Estado, establece que, el artículo 2º del C.P.L. modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, antes de los cambios introducidos por el artículo 622 del Código General del Proceso señalaba lo siguiente:

“...Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 1. Los conflictos que se originen directa o indirectamente de un contrato de trabajo. (...) 4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

Así, la jurisdicción ordinaria laboral es competente para conocer las controversias relacionadas con los contratos de trabajo, y también con el sistema de seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleados y las entidades administradoras, aspecto que cobra relevancia por la categoría de trabajador oficial que alega tener el accionado, dado que este tipo de servidores justamente se vinculan mediante ese acto consensual.

Se concluye también, que la jurisdicción ordinaria no juzga actos administrativos, como en el presente caso, donde se cuestiona en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, la validez del que le revocó la pensión de invalidez...”

Así las cosas, se podría afirmar que, en los litigios que versen sobre el reconocimiento de pensión, para efectos de establecer la competencia, la relación laboral que tenga el empleador y trabajador en el momento en que se produce el retiro del servicio, puede ser el referente que la determine, no obstante, en el caso en estudio es la materia de la controversia, lo que define la jurisdicción competente y no el estatus del servidor, sin ser relevante para el asunto, el hecho de no ser servidor público; con mayor énfasis tratándose de unas pretensiones que persiguen la NULIDAD y el RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, la cual es fundamentada por la entidad demandante ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, en el hecho de que, “... se dio apertura a un proceso administrativo especial número 294-18, adelantado por la Gerencia de Prevención del Fraude, con el fin de revisar el proceso que conllevó el reconocimiento de la Pensión de invalidez mediante la Resolución SUB 21643 del 25 de enero de 2018, a favor del señor ANGEL ENRIQUE CARVAJAL DIAZ, en las pruebas obrantes en la investigación administrativa, se evidencia la existencia una investigación penal llevada a cabo por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Fiscalía 12 Seccional de Valledupar mediante radicado 200016008792201600014, en contra de 206 personas a las cuales la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, reconoció pensiones de invalidez, presuntamente sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley y con documentación fraudulenta...” (Subraya el Despacho).

Es evidente que, la entidad demandante pretende a través de la demanda de la referencia, la NULIDAD del ACTO ADMINISTRATIVO, mediante el cual, se le reconoció la pensión de invalidez al demandado ANGEL ENRIQUE CARVAJAL DIAZ, acción que, la sustentan sobre la presunta información incluida de forma irregular en el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, emitido por los médicos de la empresa Asesorías y Servicios en Salud –ASALUD-, donde además alega la accionante que, a través de la investigación administrativa especial logró determinar que, se han configurado presuntamente hechos que se enmarcan en tipologías penales, situaciones que afectan de manera directa y adversa a COLPENSIONES, toda vez que además de afectar la confianza de los ciudadanos frente a COLPENSIONES, se genera un detrimento patrimonial de los recursos públicos que, se ve materializada con el reconocimiento de un derecho obtenido de forma fraudulenta.

Cabe resaltar que, el mecanismo ejercitado por la entidad demandante corresponde a la acción de nulidad del Acto Administrativo, mediante el cual la autoridad o entidad pública, como lo es Colpensiones, que emite un acto administrativo, busca su extinción del ordenamiento jurídico y el cese de sus efectos, por acaecer en él algunos de los eventos descritos por la ley, que afectan su estructura intrínseca, la cual corresponde a jurisdicción de lo Administrativa.

Sumado a lo anterior, es preciso indicar que, con relación al otorgamiento irregular de derechos prestacionales, el Consejo de Estado, ha señalado que, es la acción de lesividad la herramienta idónea para que la administración logre la anulación de su reconocimiento, siendo oportuno citar lo explicado por esa instancia de cierre de la jurisdicción administrativa, al puntualizar que:

“...Si las pretensiones de la demanda formulada en acción de lesividad sólo fueran admisibles cuando se observa una afectación del erario o una conducta reprochable del particular, la acción “perdería todo su contenido normativo y axiológico pues lo que ella busca es restablecer el orden jurídico quebrantado con el acto administrativo proferido en contra de los ordenamientos procedimentales o sustanciales que regulaban su creación.

En conclusión, si la administración consideraba que el reconocimiento extinguido era ilegal, el único camino jurídico - legal de que disponía, era el de demandar su propio acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, hecho que no ocurrió. Con base en todo lo anterior, entendiendo la irrenunciabilidad del derecho pensional y la carga de la Administración de demandar su propio acto, a fin de determinar que no le asiste el derecho de devengar la pensión de beneficiaria a la actora, carga que no puede trasladarse al administrado...”

Ahora, advierte este despacho que, en la presente demandada, la parte actora, no ataca la calidad de trabajador particular del accionado ANGEL ENRIQUE CARVAJAL DIAZ, ni sus cotizaciones a seguridad social, el punto de desacuerdo de COLPENSIONES, consiste concretamente, en que, el acto administrativo de reconocimiento de pensión de invalidez del accionado, no fue expedido conforme a derecho y por ello, debe declararse nulo y restablecerle el derecho que se reconoció.

Habiendo realizado el estudio del asunto, y concluyendo que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, no es acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado, aplicable al proceso de la referencia y lo establecido por la ley procesal laboral, esta instancia judicial considera que, no es competente para conocer del presente proceso, y por ello, planteará el conflicto negativo de competencia, con fundamento en el artículo 139 del Código General del Proceso.

Finalmente, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Nacional, que señala que, la Corte Constitucional tendría la función de conocer los conflictos que se presenten entre diferentes jurisdicciones, tal como fue establecido por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

Con todo, también es cierto que, el párrafo 1 del artículo 19 del mencionado acto legislativo dispuso que, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerían sus funciones hasta el día en que se posesionen los miembros de la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, razón por la cual, se ordenará el envío del expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que resuelva el conflicto planteado.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Valledupar,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FALTA DE COMPETENCIA, de este despacho judicial, para conocer de la demanda de la referencia, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: PROMOVER CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, respecto del presente proceso, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: Remítase el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que dirima el conflicto de competencia propuesto, por las razones expuestas en esta providencia.

AGGM/pcm

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Anibal Guillermo Gonzalez Moscote
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Laboral 4
Valledupar - Cesar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7bac2c471a46ffc95292ec860a593c45f9b5913af6b70ac0b3104b8fbe1a5568

Documento generado en 28/10/2021 12:25:39 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>